

EDITORIAL

El papel del estado

El debate ideológico característico de Occidente —entre radicales y conservadores, o entre socialistas y liberales, o entre izquierdas y derechas, todo es cuestión de definiciones— no lleva miras de silenciarse, pero su contenido ha experimentado un cambio dramático en el último cuarto de siglo. Fuera de la ortodoxia marxista, que intelectualmente pasa sin duda cada vez menos, la vieja posición socialista favorable al Estado productor está en franca retirada. No es que la concepción del Estado se haya desplazado del centro de la controversia. Un social demócrata hoy en día aboga por un grado de intervención estatal mucho mayor que el que complacería a un liberal pero lo que quiere es que el Estado detraiga más recursos del sector privado y los gaste conforme a un criterio social, plasmando de tal modo un ideal de comunidad concebido colectivamente e impuesto por medios políticos, mientras el liberal quería que la detracción de recursos se limitase a los necesarios para financiar el suministro de bienes públicos, y más allá de ello el gobierno interviniese sólo en casos probados de bienes con altos contenidos de costos o beneficios externos.

Tal controversia se concentra del lado de la demanda de bienes y servicios. La demanda, dada la disponibilidad de recursos, es la que moldea la oferta. La corriente de producción será una si la demanda del gobierno representa una alta proporción del total y otra bien distinta si los titulares privados de los recursos productivos conservan en alto grado el control de las decisiones sobre qué bienes han de producirse. Pero ambas posiciones son compatibles con un Estado dispuesto a reconocer que la producción en sí misma no forma parte de su ventaja comparativa.

La declaración del Partido Socialista alemán de Bad Godesberg en 1959, que eliminó de su plataforma política la nacionalización o estatización de empresas, merece ser considerado como el mojón de la nueva era. Veintiséis años más tarde podemos enterarnos sin demasiada sorpresa de los programas privatizadores de diversos gobiernos socialdemócratas. La España de Felipe González, por ejemplo, agobiada por el déficit de tres mil millones de dólares que le reporta el imperio industrial que regentea el INI, encara un programa sumamente ambicioso en aquel sentido, que ya le ha permitido

desprenderse de empresas de los sectores textil, automotor, y turístico.

El gobierno de Bettino Craxi, igualmente socialista, igualmente afligido por un imperio industrial deficitario, ha hecho que su gestor, el IRI, vendiera empresas por sumas ingentes, que en 1984 totalizaron mil quinientos millones de dólares, y que han incluido bancos, procesadores de alimentos, y el 51% de la compañía telefónica.

Los japoneses tienen un sector público comparativamente muy pequeño en todo sentido, incluso en su área empresarial, pero con todo el gobierno ha estado activo reduciéndolo. El caso más notorio es el de la Empresa Nacional de Teléfonos y Comunicaciones, destinada a pasar al sector privado gradualmente, a través de la venta de sus acciones en la bolsa, de las que el fisco japonés espera extraer entre 30 y 40 mil millones de dólares en cuatro años. En análogo sentido, se reducirá el papel de las empresas estatales en los sectores tabacalero y aéreo. El cambio más radical es tal vez el que se planea en el orden ferroviario, donde el actual monopolio estatal será sustituido por ocho compañías privadas.

Alemania Federal ha puesto en venta su mayoría accionaria en Lufthansa, el complejo petroquímico Veba, empresas metalúrgicas, dos bancos, y un consorcio inmobiliario. Holanda se propone desembarazarse de catorce operaciones en un futuro cercano. En Gran Bretaña, luego de la sonada venta del 50.2% de British Telecom el año pasado, por cinco mil quinientos millones de dólares, el gobierno proyecta reanudar cerca de 11 mil millones más con privatizaciones que incluyen el monopolio del gas natural, la British Airways, la compañía nacional de ómnibus, la fábrica de turbinas Rolls Royce, la empresa aeronáutica Shorts, la fábrica de autopartes Unipart, y el complejo de producción de armamentos Arsenales Reales. Con ello unos 600 mil puestos de empleo pasarán al sector privado.

Comentando para *Ambito Financiero* un artículo de *The Economist*, del cual proviene la información precedente, Edward Page escribe:

"La palabra privatización parece, en esta segunda mitad de la década de los '80, emerger como la panacea de los problemas económicos de los países que enfrentan una sobredimensionada deuda externa, una economía

deprimida, o un déficit fiscal perturbador. De Holanda a Tailandia y de Chile a Canadá, de Londres a Kuala Lumpur y de Ciudad de México a Nairobi, los gobiernos confeccionan listas de empresas y organismos de servicios públicos que desearían ver transferidos total o parcialmente a manos privadas".

Es imperioso que el Uruguay no permanezca por más tiempo al margen de esta arrolladora tendencia. El país sólo podrá salir de su actual afascamiento en el fondo de un profundo valle recesivo si deja que la sensatez prevalezca en todos los aspectos de su política. Tal requerimiento incluye indefectiblemente una profunda revisión del papel del Estado, y de su acervo de empresas públicas.

Los obstáculos para avanzar en esa dirección son de dos órdenes. El primero es el de los intereses creados. El segundo es el de la ideología, el de la tenacidad de los viejos mitos.

El primero es importantísimo. En todo tiempo y país la política ha estado asociada al otorgamiento de sinécuras por quienes están en el poder. Las empresas estatales son la principal fuente de sinécuras para nuestros gobiernos. Al mismo tiempo, hay una vasta burocracia que se aferra a la seguridad de sus puestos, por más que ella conlleve mediocridad y frustración en proporciones desoladoras. Todo esto es cierto, y no lo es menos que los intereses afectados por cualquier proyecto de reforma no van a entregarse sin pelear. Pero igualmente cierto es que los intereses creados opuestos a la reforma del sector público existen en el mundo entero, y ya vimos que en todas partes están en desbandada.

Más imponente aún nos parece el obstáculo de los mitos, que, a través de tres cuartos de siglo de ser alimentados desde fuentes oficiales, han desarrollado una masa difícil de desplazar. Aquí hay un problema de liderazgo. Al Presidente de la República, a su partido, y en general a la dirección política de los partidos tradicionales, ambos comprometidos en algún grado importante con la ideología estatista, se les plantea el desafío de reinterpretar la orientación general de sus movimientos, rescatando lo que ella contenga de esencial, y echando por la borda el resto, que incluye la desquiciante carga totémica.

De que puedan hacerlo, y hacerlo pronto, depende de manera crucial el futuro de nuestra República.